



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

ASUNTO	APELACIÓN SENTENCIA - VERBAL
DEMANDANTES	PIEDAD CECILIA ESTRADA MÉNDEZ Y OTROS
DEMANDADOS	BANCO DE OCCIDENTE S.A. Y OTRO.
DECISIÓN	CONFIRMA
PROCESO RDO.	05001-31-03-001-2017-00163-02

Medellín, diez de julio de dos mil veintitrés

ANTECEDENTES

1. DEMANDA: Piedad Cecilia Estrada Vélez, Nelson Alberto Sánchez Alzate e Inversiones Nasa Ltda., por medio de apoderado judicial, presentaron demanda en contra del Banco de Occidente S.A. y Central de Inversiones S.A., con las siguientes pretensiones:

*"PRIMERA: Se declare en favor de PIEDAD CECILIA ESTRADA MENDEZ, NELSON ALBERTO SANCHEZ ESTRADA E INVERSIONES NASA LTDA., LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA del crédito, contenido en la Sentencia proferida por el JUZGADO PRIMERO (1) CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, con fecha 7 de julio de 2.010, dentro del proceso ejecutivo singular instaurado por el BANCO DE OCCIDENTE S.A.- radicado 05001310300120090068200, en contra de PIEDAD CECILIA ESTRADA MENDEZ, NELSON ALBERTO SANCHEZ ESTRADA Y (sic) INVERSIONES NASA LTDA. Representada legalmente por NELSON ALBERTO SÁNCHEZ ALZATE, a favor del ejecutante y en contra de mis poderdantes, y que fuese aceptada parcialmente la cesión del crédito a favor de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. Por el transcurso del tiempo de que trata los artículos 2535 al 2541 del Código Civil, por la inacción del ejecutante para hacer efectiva dicha sentencia.*

*SEGUNDA: Que como consecuencia de dicha declaración se ordene lo siguiente:*

- *OFICIAR al Juzgado TERCERO DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE MEDELLÍN – JUZGADO DE ORIGEN- PRIMERO DEL CIRCUITO- radicado 05001310300120090068200 -DEMANDANTE: BANCO DE OCCIDENTE S.A. Y CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CESIOONARIO en contra de PIEDAD CECILIA ESTRADA MENDEZ, NELSON ALBERTO SANCHEZ ESTRADA Y (sic) INVERSIONES NASA LTDA., la terminación del mismo por la extinción de la obligación; Ordenándose la cancelación de todas las medidas cautelares de embargo y secuestro decretadas (...)."*

Como fundamento de lo pretendido, el apoderado judicial de la parte demandante expuso:

a. El 28 de octubre de 2009, el Banco de Occidente S.A. radicó demanda ejecutiva singular en contra de Piedad Cecilia Estrada Méndez, Nelson Alberto Sánchez Estrada e Inversiones Nasa Ltda., la cual fue tramitada ante el Juzgado 001 Civil del Circuito de Medellín, bajo el radicado 05001-31-03-001-2009-00682-00.

b. El 07 de julio de 2010, en el proceso ejecutivo en mención, se profirió sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución, la cual fue notificada por estados el 12 de julio de 2010 y se encuentra debidamente ejecutoriada.

c. La obligación contenida en la sentencia de 07 de julio de 2010 se hizo exigible desde cuando la decisión quedó ejecutoriada, para que la parte ejecutante persiguiera los bienes de los ejecutados -ahora demandantes- con el fin de rematarlos y satisfacer el crédito pretendido.

d. Mediante auto de 01 de septiembre de 2010, el juzgado aceptó la subrogación legal y parcial que el Banco de Occidente S.A. hiciera en favor del Fondo Nacional de Garantías S.A. hasta por la suma de \$93 049 258 en relación con el pagaré N° 4700007161-7, por abono que esta entidad hiciera al banco, en atención a lo reglado en los artículos 1666 a 1671 del Código Civil.

e. Mediante auto de 01 de agosto de 2014, el juzgado aceptó la cesión del crédito que el Fondo Nacional de Garantías hizo a Central de Inversiones S.A.

f. Los demandantes están legitimados para pretender la extinción del derecho que tienen los acreedores -Banco de Occidente S.A. y Central de Inversiones S.A.- por medio de la prescripción de la acción ejecutiva de que tratan los artículos 2535 y 2536 del Código Civil, toda vez que aquel se hizo exigible desde el 16 de julio de 2010, fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada, por lo cual, a la fecha de la presentación de la demanda –27 de marzo de 2017- ha transcurrido un lapso mayor a 6 años sin que los acreedores hubieren emprendido alguna acción para hacer efectivo el derecho allí contenido.

g. La acción ejecutiva contenida en la sentencia de 07 de julio de 2010 prescribió cinco (5) años después de la exigibilidad o ejecutoria, es decir, el 17 de julio de 2015.

## 2. CONTESTACIÓN:

2.1. El demandado Banco de Occidente S.A., notificado en forma personal (fol. 347), por medio de apoderado judicial contestó la demanda y alegó las “excepciones” que denominó: (i) *"Inexistencia del derecho temerariamente pretendido por la actora a que se declare la prescripción extintiva de la acción ejecutiva, toda vez que mi representado ha sido diligente y ha dado actividad e impulso procesal a la acción ejecutiva radicada bajo el No. 2009-0682"*, (ii) *"Cosa juzgada impide que se configure cualquier acción tendiente a declarar la prescripción extintiva de la acción ejecutiva"*, y (iii) *"Carecer el demandante del derecho pretendido para solicitar prescripción extintiva de la acción ejecutiva"*.

2.2. La demandada Central de Inversiones S.A., notificada por aviso (fol. 354-368) por medio de apoderada judicial contestó la demanda y presentó las “excepciones” que denominó: (i) *"Ilegalidad de las pretensiones"*, y (ii) *"Temeridad y mala fe"*.

3. SENTENCIA ANTICIPADA: En decisión de 13 de diciembre de 2018, el Juzgado 001 Civil del Circuito de Medellín, de conformidad con el numeral 2 del artículo 278 del Código General del Proceso, tras considerar que era *"innecesaria e irrelevante la práctica de prueba alguna"*, profirió sentencia anticipada mediante la cual decidió *"DENEGAR por IMPROCEDENTE la*

*Pretensión de Prescripción Extintiva del Derecho contenido en el Auto proferido por este Despacho el Siete (7) de Julio de 2010”.*

El funcionario judicial consideró que lo pretendido por la parte demandante conllevaría a la destrucción de la cosa juzgada como pilar fundamental de la seguridad jurídica y precisó que en este evento no se trata de estudiar la figura de la cosa juzgada como excepción, en tanto no se está alegando la triple identidad de partes, objeto y causa. Luego, refirió que la parte demandante hizo una indebida interpretación de los artículos 2535 a 2541 del Código Civil y aclaró que una cosa es la sentencia declarativa que efectivamente se erige como título ejecutivo y que, por supuesto, debe presentarse en los términos perentorios al cobro mediante proceso ejecutivo, y otra cosa muy diferente es que en el transcurso del proceso ejecutivo se profiera el auto que ordena seguir adelante la ejecución –providencia que hace tránsito a cosa juzgada-.

El juez si bien dio cuenta de actuaciones judiciales posteriores al auto de 07 de julio de 2010 que permiten concluir que la prescripción fue interrumpida, lo cierto es que, en todo caso, determinó que en el supuesto de que dichas actuaciones posteriores no se hubieran presentado, ello no podría servir de excusa para extinguir el derecho reconocido en la providencia en mención a favor del allí demandante, en tanto la providencia cuestionada fue proferida en un proceso ejecutivo cuyo trámite subsiguiente a la orden de seguir adelante la ejecución aún se encuentra en curso.

En tal orden, el *a quo* concluyó que la prescripción extintiva del derecho contenido en la providencia resulta improcedente, habida cuenta de la evidente atipicidad de la pretensión, pues lo reclamado por los demandantes no está enfocado a cuestionar una sentencia que se hubiere erigido como título ejecutivo para su posterior materialización, sino a enervar la fuerza de la cosa juzgada como institución de la que es contentiva la providencia proferida el 07 de julio de 2010.

4. APELACIÓN: Inconforme con lo resuelto, la PARTE DEMANDANTE presentó recurso de apelación y al respecto elevó los siguientes reparos concretos:

-El juez erró al proferir sentencia anticipada en este asunto, pues la audiencia estaba programada para el 14 de diciembre de 2018, por lo que aplicar el

principio de economía procesal ya no tenía sentido y, por el contrario, en tal diligencia las partes pudieron haber presentado alegatos de conclusión y cuestionar la sentencia en la misma audiencia. Además, la parte recurrente refirió que como el juez no declaró la cosa juzgada, sino que declaró la improcedencia de lo pretendido, pretermitió la etapa procesal prevista en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, que conduce a la nulidad de la sentencia.

- El juez se equivocó al fundamentar lo decidido en la figura de la cosa juzgada, ya que en ningún momento se cuestionó los elementos sustanciales de la demanda ejecutiva que cursó bajo el radicado 2009-00682, en tanto no existe ningún tipo de reproche o excepción de mérito que pretenda dejar sin efecto la validez de la sentencia proferida en ese proceso. Al respecto, la parte recurrente precisó que la prescripción extintiva invocada en este asunto es totalmente diferente a la que se pudo alegar en el proceso ejecutivo respecto a la acción cambiaria, la cual no se invoca en este asunto porque entonces se pretendería revivir hechos que ya fueron controvertidos.

-El hecho que se reclama en este caso tiene como fuente un fallo o providencia judicial, llámese sentencia o auto que ordena seguir adelante con la ejecución, al que no se le ha dado el impulso procesal que ordena la ley. Es decir, aquí no se debaten hechos que podían haber sido objeto de excepciones en el trámite del proceso ejecutivo inicial, simplemente porque no había nacido a la vida jurídica la sentencia.

-En la legislación colombiana no hay obligaciones imprescriptibles. La ley no indica que las sentencias en los procesos ejecutivos sean imprescriptibles. La prescripción de la acción ejecutiva empieza a correr desde que la obligación se hizo exigible, es decir, desde la ejecutoria del auto que ordena seguir adelante la ejecución. En este asunto no se materializaron los actos procesales propios para hacer efectiva la sentencia, entre ellos, auxiliar y entregar el oficio para la diligencia de secuestro, solicitar el remate, entre otros. Además, a partir de la ejecutoria de la sentencia, los demandantes no han reconocido tácita ni expresamente la obligación allí decretada, que implique interrupción de la prescripción. Además, el hecho de existir el proceso ejecutivo, no implica que el término se interrumpa para todo el trámite procesal o para toda la vida, pues

una vez dictada la sentencia, la parte demandante contaba con cinco (5) años para hacerla efectiva.

## 5. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA.

5.1. La parte demandante –recurrente por activa- precisó que para la sustentación del recurso de alzada se valía de los mismos argumentos expuestos en los reparos concretos presentados ante el juez *a quo*. Al respecto, reiteró que el juez de primera instancia confunde la prescripción de la acción Cambiaria que establece el artículo 789 del Código de Comercio y la prescripción extintiva establecida en el artículo 2535 del Código Civil. Asimismo, insistió en que el Juez no estaba facultado para dictar sentencia anticipada, dado que no se cumplía con los elementos formales de la cosa juzgada.

5.2. La demandada Central Inversiones S.A. –no recurrente-, solicitó que la sentencia sea confirmada y refirió –en síntesis- que no es lógico que la parte demandante pretenda contabilizar los términos de prescripción extintiva de una sentencia que aún se encuentra en ejecución ante el Juzgado 003 Civil del Circuito de Ejecución de Medellín.

5.3. El demandado banco de Occidente S.A., presentó escrito de alegatos en forma extemporánea.

## CONSIDERACIONES

1. PRECISIÓN PRELIMINAR: Previo a delimitar el problema jurídico suscitado mediante el recurso interpuesto, es pertinente abordar la inconformidad presentada por la parte recurrente, mediante la cual cuestionó que el juez haya proferido sentencia anticipada sin ajustarse a los requisitos del artículo 278 del Código General del Proceso. En efecto, la parte apelante señaló que el juez se equivocó al proferir fallo anticipado, en tanto allí no declaró probada la excepción de cosa juzgada, sino que simplemente hizo alusión a tal figura para declarar la improcedencia de lo pretendido, con lo cual dio pie a que la actuación adolezca de nulidad procesal por haber pretermitido la etapa procesal prevista en los artículos 372 y 373 *ibídem*. Asimismo, precisó que como el juez había fijado para el 14 de diciembre de 2018 la práctica de la

audiencia prevista en el artículo 372 del estatuto procesal, no tenía sentido de cara al principio de la economía procesal, que la decisión anticipada se proferiera el 13 de diciembre de 2018.

1.1. El artículo 278 del Código General del Proceso, dispone:

*"(...) En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:*

- 1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.*
- 2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.*
- 3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa"*

En este asunto, el juez de primer grado determinó que proferir sentencia anticipada era procedente de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 278 del Código General del Proceso, en tanto consideró *"innecesaria e irrelevante la práctica de prueba alguna"*, tras advertir que el asunto objeto de debate se circunscribía a una discusión de pleno derecho, por lo que no es cierto, como lo afirma el extremo recurrente, que la causal invocada por el juzgador haya sido haber encontrado probada la *"cosa juzgada"* y que al no haberse decretado la misma, no había lugar al fallo anticipado. En efecto, lo realmente acontecido fue que el juez, en la motivación de la decisión de fondo, hizo alusión a la figura de la cosa juzgada, pero no porque ese fuera el motivo para adelantar el fallo, sino porque lo consideró necesario para justificar las razones de la decisión de fondo.

Por lo tanto, la Sala advierte que, en este asunto, contrario a lo expuesto por la parte apelante, el juez hizo bien al ajustar la decisión anticipada de primera instancia a la regla prevista en el numeral 2 del artículo 278 del Código General del Proceso<sup>1</sup>. A propósito, como se advierte de la decisión, el juzgador

---

<sup>1</sup> La Corte Suprema de Justicia -Sala Civil- en sentencia de tutela de 27 de abril de 2020, exp. 47001 22 13 000 2020 00006 01, explicó: *"En síntesis, la permisión de sentencia anticipada por la causal segunda presupone: 1. Que las partes no hayan ofrecido oportunamente algún medio de prueba distinto al documental; 2. Que habiéndolas ofertado éstas fueron evacuadas en su totalidad; 3. Que las pruebas que falten por recaudar fueron explícitamente negadas o*

previamente expuso las razones por las cuales la sentencia podía proferirse sin las pruebas pendientes de recaudo, lo que bien hizo en la misma providencia, sin que la parte recurrente, al interponer la alzada, haya cuestionado la motivación del juzgador de primera instancia para prescindir de la práctica de pruebas.

1.2. En tal sentido, la Sala advierte que el juez actuó bien al considerar que las pruebas pedidas diferentes a las documentales serían innecesarias para zanjar la litis y seguidamente proferir sentencia anticipada en forma escrita sin necesidad de hacerlo oralmente en vista pública conforme con los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, pues precisamente el fin del fallo adelantado es que la contienda se defina antes de que todas las etapas que, en principio, deberían llevarse a cabo para proferir sentencia, se agoten. Al respecto la Corte Suprema de Justicia, ha referido que

*"(...) cuando el fallo se emite en forma escrita no es forzoso garantizar la oportunidad para las alegaciones finales dada la ausencia de práctica probatoria, porque aquellas son una crítica de parte acerca del despliegue demostrativo, de suerte que si éste no se llevó a cabo no hay sobre qué realizar las sustentaciones conclusivas, teniendo en cuenta que las posturas de los contendientes están plasmadas en sus respectivas intervenciones anteriores (demanda y réplica)"<sup>2</sup>.*

En este orden, no es cierto que se haya pretermitido alguna etapa procesal que dé lugar a revisar los motivos de nulidad previstos en el artículo 133 ibídem, ya que si el juez en la misma sentencia justificó la necesidad de fallar con anticipación, lo hizo amparado en el artículo 278 del Código General del Proceso y, por tanto, es obvio que no pretermite la oportunidad para decretar y practicar pruebas, porque precisamente la denegó por innecesaria y, además, no se pretermite la oportunidad para presentar alegatos, porque como se advirtió, esa etapa es para debatir sobre las pruebas practicadas y en este caso ello no aconteció. Además, el hecho de que el juez haya convocado a audiencia conforme al artículo 372 ibídem y un día antes haya proferido la decisión anticipada por escrito, no significa que haya resultado inane aplicar el principio

---

*desistidas; o 4. Que las probanzas faltantes sean innecesarias, ilícitas, inútiles, impertinentes o inconducentes".*

<sup>2</sup> Corte Suprema de Justicia -Sala Civil- en sentencia de tutela de 27 de abril de 2020, exp. 47001 22 13 000 2020 00006 01.



de la economía procesal, pues efectivamente, fue en desarrollo de este mismo, que el juez, al considerar acertadamente que se daban las condiciones del numeral 2 del artículo 278 del Código General del Proceso, se abstuvo de tramitar la totalidad de las etapas del proceso y profirió el fallo anticipado.

2. PROBLEMA JURÍDICO: Dilucidado lo anterior, en atención al recurso interpuesto, a esta Sala corresponde definir, conforme con la competencia restrictiva del artículo 328 del Código General del Proceso, si la parte apelante tiene razón al señalar que la decisión de primera instancia debe ser revocada, en tanto que una debida aplicación de las normas que regulan la prescripción extintiva, permite concluir, diferente a lo expuesto por el juez *a quo*, que en este caso se debe decretar la prescripción extintiva del crédito contenido en la providencia de 07 de julio de 2010, por medio de la cual se ordenó seguir adelante la ejecución en el proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado 001 Civil del Circuito de Medellín bajo el radicado 05001-31-03-001-2009-00682-00.

3. MARCO NORMATIVO Y DE PRECEDENTES JUDICIALES PARA LA DECISIÓN DEL CASO EN CONCRETO.

El artículo 2535 del Código Civil dispone que *"La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible"*.

Según el artículo 2536 ibídem *"La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término"*.

Por su parte, el artículo 2539 de la misma codificación, indica que:

*"La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente."*

*Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.*

*Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 2524”.*

4. SOLUCIÓN AL CASO EN CONCRETO. En este asunto, la Sala desde el inicio advierte que a la parte recurrente no le asiste razón y, por tanto, la decisión de primera instancia, que declaró la improcedencia de lo pretendido, debe ser confirmada.

Como lo reiteró la parte apelante, lo que se pretende en este caso es que, mediante sentencia, se declare la prescripción extintiva del crédito contenido en el auto proferido el 07 de julio de 2010, mediante el cual se ordenó seguir adelante la ejecución en el proceso ejecutivo tramitado bajo el radicado 05001-31-03-001-2009-00682-00, por cuanto la parte ejecutante no ejerció las acciones legales para hacerlo efectivo en los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de esa decisión.

Empero, la Sala encuentra, en consonancia con lo expuesto por el juez *a quo*, que en este asunto la naturaleza de la providencia que contiene el derecho sobre el que se pretende la extinción por prescripción, impide en forma objetiva la prosperidad de la pretensión. En efecto, en el proceso ejecutivo no es posible que opere un nuevo término de prescripción a partir del auto que ordena seguir adelante con el cobro, pues no tendría ningún sentido la interrupción civil prevista en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil –hoy artículo 94 del Código General del Proceso<sup>3</sup>-, sobre todo porque el proceso ejecutivo no

---

<sup>3</sup> "La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado.

La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo se producirán a partir de la notificación.

(...) Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos (...)"

termina con la sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución, sino con el pago de la obligación pretendida, por lo que a partir de dicha providencia judicial, se sigue una serie de etapas procesales con el fin de lograr que se satisfaga la obligación (liquidación de crédito, práctica de avalúos, remates de bienes embargados, etc.). Ahora, cabe precisar que, la situación es diferente cuando se trata de la sentencia condenatoria proferida en un proceso declarativo, en cuanto la misma constituye título ejecutivo y da lugar a que con ella se inicie una acción ejecutiva que se encuentra sujeta a los términos de prescripción previstos en el artículo 2536 del Código Civil.

En este orden, no es necesario siquiera entrar a estudiar si a partir de la providencia de 07 de julio de 2010 la parte ejecutante adelantó actuaciones tendientes al recaudo efectivo de la obligación conforme con el auto que ordena seguir adelante la ejecución, en tanto en procesos ejecutivos que ya cuentan con providencia que sigue adelante la ejecución, no es posible aplicar la figura de la prescripción extintiva como sanción a la parte ejecutante que no impulse el proceso o cumpla con las cargas procesales pertinentes para satisfacer la obligación reclamada en el mismo trámite de la ejecución, pues para castigar esa desidia el ordenamiento jurídico contempló otro tipo de figura, como la del desistimiento tácito.

Sobre el particular, en un caso análogo, la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC9827 de 24 de julio de 2019, determinó la improcedencia de la prescripción extintiva respecto de la sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución, en los siguientes términos:

*"(...) La extintiva, que importa para el caso por ser la alegada por el accionante, extingue el derecho sin que se predique ganancia o contrapartida alguna del favorecido con la prescripción; y puede alegarse como acción cuando quien demanda su declaración demuestra un interés serio, concreto y actual. Pero, además, puede formularse como excepción, que es la clásica manera de oponerse el deudor.*

*Dicho fenómeno puede interrumpirse (i) de forma natural, por el reconocimiento que el deudor hace de la obligación de manera expresa o tácita, o porque la confiese o haga abonos, o pague intereses, por ejemplo; (ii) o civilmente, con la presentación de la demanda en la*

*forma estipulada por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, hoy 94 del Código General del Proceso.*

*De ahí, que si el término de decaimiento no ha operado al momento de presentarse el libelo y se notifica el auto admisorio o de mandamiento de pago al demandado, según sea el caso- en la forma y términos de ley (art. 94 CGP)-, entonces la misma no puede volver a correr al interior del mismo proceso, por la sencilla razón de que se interrumpió.*

*Ahora bien, es cierto que el inciso final del artículo 2536 del Código Civil establece que «Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término», norma que se aplica para todo tipo de interrupción, pues la Ley no introdujo diferencia alguna. De suerte que también a partir de la interrupción civil de la prescripción vuelve a correr el término prescriptivo.*

*Sin embargo, no es posible entender que ese nuevo término opere al interior del juicio en donde se interrumpió civilmente, pues ningún sentido tendría, entonces, la previsión del referido artículo 90 ibídem, así que, sólo es viable decir que se vuelve a contar, si el proceso no termina con sentencia, pues en este caso el derecho sigue siendo discutible y, por tanto, aún subsiste una acción que es susceptible del decaimiento por el curso del tiempo; pero no, cuando luego de presentada la demanda y notificado el mandamiento de pago en la forma en la norma, se profiere la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, pues ya se ha ejercido la reclamación de la obligación y no habría lugar a aplicar una consecuencia procesal que el legislador no previó.*

*Situación bien distinta es la sentencia dictada en un proceso de conocimiento, en cuanto constituye título ejecutivo y da lugar a una nueva acción: la acción ejecutiva, la cual es prescriptible de conformidad con lo establecido en las leyes civiles.*

*(...) Por tanto, no es posible introducir una consecuencia procesal que el legislador no previó y que no puede prever porque el instituto de la prescripción atiende a una discusión sobre el fondo del litigio y ninguna relación tiene con los efectos adjetivos que se derivan de la falta de cumplimiento de una carga procesal, pues para esto último el legislador*

*tiene previstas otras figuras de especiales connotaciones como lo es el desistimiento tácito.*

*Así que si en el presente caso, ya se había ejercido la acción ejecutiva y se logró sentencia en dicho proceso, no cabe duda que no había lugar a decretar la prescripción de la obligación que se cobró mediante dicho litigio y, menos aún, la decisión que dispuso que debían darse los trámites necesarios para lograr el pago con los bienes objeto de la garantía, como acertadamente lo entendió el juzgador accionado.*

*4. Sumado a lo anterior, si lo que reprocha la parte es la negligencia de su ejecutante al no cumplir su carga procesal de gestionar el proceso ejecutivo, pues el expediente permaneció muchos años sin que tuviera movimiento alguno, debió en el curso de dicho litigio, solicitar la aplicación de las sanciones que el estatuto adjetivo civil estableció para dicha decisión, como las formas anormales del proceso, tales como el desistimiento tácito que debía solicitarse en la forma y términos del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, ahora 307 Código General del Proceso, lo que no se encuentra haya hecho uso el accionante”.*

4. Así las cosas, no se advierte la necesidad de ahondar en mayores consideraciones ni estimar otros aspectos para concluir que la decisión de primera instancia debe ser confirmada. Las costas de esta instancia correrán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho, se fijará la suma de \$2'320.000<sup>oo</sup>, equivalente a 2 SMLMV.

#### DECISIÓN

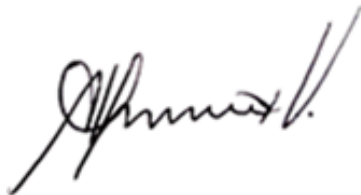
Por lo expuesto la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2018 por el Juzgado 001 Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Las COSTAS de esta instancia se imponen a la parte apelante y a favor de la parte demandada. Como agencias en derecho se fija un valor de \$2'320.000<sup>oo</sup>, que equivale a 2 SMLMV.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


Los magistrados,



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA



RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN  
Con aclaración de voto

## **ACLARACION DE VOTO**

Estoy de acuerdo con la decisión, pero me veo precisado a aclarar el voto como se pasa a indicar.

En efecto, el art. 346 del C. de P. Civil, en su redacción original no consagró la perención para todos los procesos; al efecto, en el inciso 4º consagraba: *"Lo dispuesto en este artículo no se aplica a los procesos en que sea demandante la nación, un departamento, una intendencia, una comisaría o un municipio. Tampoco se aplica a los procesos de división de bienes comunes, de deslinde, de jurisdicción voluntaria, de sucesión por causa de muerte y de liquidación de sociedades, ni a los de ejecución. En los últimos, podrá pedirse en vez de la perención, que se decrete el desembargo de los bienes trabados, los que no podrán embargarse de nuevo en el mismo proceso, antes de un año"*.

De tal manera que no era posible la terminación de los procesos ejecutivos por perención y, en su lugar, solo se permitía solicitar el levantamiento de las medidas ejecutivas decretadas, pero se sostuvo que en los hipotecarios, dada su naturaleza, no era posible ese desembargo.

Bajo estas circunstancias cuando no había forma de hacer efectiva la obligación en un proceso ejecutivo, después de proferida la sentencia ordenando seguir adelante con la

ejecución, como no había forma de darlo por terminado, el ejecutado y sus herederos quedaban atados para siempre a ese proceso, lo que conllevaba inseguridad jurídica.

Se consideró que la obligación se podía extinguir por prescripción, así de por medio hubiera una sentencia ordenando seguir adelante la ejecución, postura que sostuve y adopte. Al efecto, la sala sostuvo:

*"En primer lugar deberá dilucidar el Tribunal si es posible invocar la prescripción de una obligación que se persigue en un proceso ejecutivo, después de que se ha proferido sentencia ordenando seguir adelante la ejecución, invocando como soporte la inacción del ejecutante y, si fuere el caso, se procederá a determinar si hay lugar a reconocer la prescripción invocada.*

## **"2. La prescripción de obligaciones reconocidas en una sentencia de ejecución.**

*"De entrada se advierte que el numeral 2° del artículo 509 del C. de P. Civil, al enumerar en forma taxativa las excepciones que se pueden invocar en un proceso ejecutivo, cuando se aporta como base de recaudo una sentencia o un laudo de condena, u otra providencia, que conlleve ejecución, expresamente indica que se puede proponer la de prescripción, siempre que se base en hechos posteriores a la respectiva providencia, sin distinguir si*



*tiene que ser proferida en un proceso de conocimiento - proceso declarativo (Sección Primera, Título XXI), o en uno de ejecución (Sección Segunda Título XXVII).*

*"Por su parte, las normas sustanciales al regular la prescripción extintiva tampoco hacen tal distinción. Es evidente que si en un proceso ejecutivo, se ordena cesar la ejecución y se condena en costas a la parte demandante, resultaría exótico afirmar que en el proceso ejecutivo que a su vez se siga para hacer efectiva tal prestación, no se pueda invocar por el deudor la prescripción de la obligación.*

*"Y como la verdad es que en un juicio ejecutivo cuando se ha proferido sentencia ordenando seguir adelante con la ejecución, no existen mecanismos al interior del proceso, para invocar la prescripción de la obligación reconocida en la sentencia, no se advierte inconvenientes para que se pueda invocar mediante acción a través de un proceso declarativo; una conclusión contraria, conllevaría a desconocer el principio de que en Colombia no existen obligaciones irredimibles, el cual consagraba expresamente la Carta Política anterior y que subsiste en la actual, como lo ha precisado la Corte Constitucional al indicar:*

*"La perpetuidad, extraña e incompatible al concepto de obligación, contraría el orden público de la Nación por suprimir **ad eternum** la libertad contractual (artículos 15, 16 y 1602, Código Civil; 871 y 899, Código de Comercio).*

*"El artículo 37 de la Constitución de 1886 "en orden a asegurar la libertad de los aspectos económicos del tráfico jurídico", disponía que "[n]o habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación, ni obligaciones irredimibles", o sea, "las que no hay manera jurídica de abolir en ningún momento y duran siempre, sin que el deudor esté en capacidad de evitar su cumplimiento por los medios normales de extinción que prevé el derecho" (Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia de 23 de noviembre de 1973).*

*"La Constitución Política de 1991, incorporó al derecho interno los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos, consagró disposiciones de principio, enunció un catálogo mínimo de derechos fundamentales, libertades y garantías, enfatizó en la persona como centro motriz del ordenamiento, en su dignidad, libertad e igualdad, libre desarrollo de la personalidad, trabajo, profesión u oficio, garantía de la propiedad privada, función social de los derechos, iniciativa económica y libertad de empresa, cuya sola mención excluye toda relación perpetua al aniquilar per se la libertad, cuestión ésta de indudable orden público por concernir a principios ontológicos de la estructura política, el ordenamiento jurídico y a intereses vitales para el Estado y sociedad. Por demás, la transitoriedad de la relación jurídica y la prohibición de relaciones contractuales u obligatorias*

*perpetuas, deriva de los principios generales de las obligaciones.*

*"En esta virtud, los negocios jurídicos, contratos, y las obligaciones de esta estirpe, son temporales y terminan por las causas legales o contractuales. A este propósito, el cumplimiento oportuno e íntegro, es por excelencia el modo extintivo deseable, normal u ordinario"<sup>4</sup>.*

*"Así mismo, el Tribunal Constitucional, al revisar una sentencia de tutela, que negó la perención de un proceso por la inactividad del ejecutante en un proceso ejecutivo, expresamente se pronunció sobre éste tópico, indicando:*

*"Adicionalmente, advierte la Sala que en el presente caso, los derechos surgidos con ocasión de la sentencia ejecutiva ya se encuentran prescritos, habida cuenta que han transcurrido más de 17 años desde su reconocimiento.*

*"En este sentido, el artículo 2515 del Código Civil define la prescripción como un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. El profesor Arturo Alessandri Rodríguez, por su parte, define en particular la prescripción*

---

<sup>4</sup> Sala de Casación Civil – Corte Suprema de Justicia; sentencia del 30 de agosto de 2001, M. P. Dr. William Namén Vargas.

*extintiva así: en realidad lo que se extingue por la prescripción extintiva no es la obligación, sino la acción o el derecho del acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación de parte del deudor.* [\[29\]](#) Finalmente, los Hermanos Mazeud consideran que la prescripción extintiva o liberatoria es un modo legal de extinción, no de la obligación misma, sino de la acción que sanciona la obligación.

*"La prescripción extintiva está contemplada en nuestra Legislación Civil en su artículo 2536, el cual señala que la acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco.*

*"Se ha entendido que la prescripción extintiva tiene una estrecha relación con principios constitucionales como el orden público, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica, por ello es protegida dentro de nuestro ordenamiento. En efecto, en los casos en los que el titular de un derecho permanece indefinidamente sin ejercerlo, no sólo se encuentra involucrado el interés particular, sino también el interés general en la seguridad jurídica del ordenamiento y estabilidad de las relaciones.*

*"En estos términos, la presencia de la prescripción extintiva es indispensable por exigencias del tráfico jurídico y en razón de la necesidad de la certeza de las relaciones jurídicas, de claridad, de seguridad y paz jurídicas, de orden*

*y paz social y para sanear situaciones contractuales irregulares.* [\[30\]](#)

*"Así las cosas, en primer término ha de tenerse en cuenta que el cumplimiento de las prestaciones reconocidas en la sentencia de condena puede obtenerse ante el juez que la profirió, bien mediante diligencia en los términos prevenidos por el artículo 337 del Código de Procedimiento Civil* [\[31\]](#) *cuando se haya ordenado la entrega de bienes inmuebles o muebles que puedan ser habidos; o bien, adelantando el proceso de ejecución, caso en el cual el título ejecutivo es la sentencia debidamente ejecutoriada.*

*"Hecha la anterior precisión, se concluye que si de la acción ejecutiva se trata, su ejercicio debe darse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Es decir, en el sub examine, los derechos contenidos en la sentencia condenatoria, que se convierte en el título ejecutivo, se encuentran prescritos desde el año 1999, habiendo transcurrido más de 17 años desde su reconocimiento.*

*"No obstante, resalta la Sala el hecho de que el artículo 2513 del Código Civil es contundente en señalar que el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio. Se observa que, en el presente caso, la señora Luz Marina Huertas Aramendiz ha debido solicitar la prescripción de la acción ejecutiva ante el juez ordinario de conocimiento. Ahora bien, se observa*

*que la accionante no tuvo oportunidad procesal para alegar la prescripción extintiva de los derechos contenidos en la sentencia ejecutiva, puesto que, tal como se expresó, el proceso ha permanecido por mucho tiempo inactivo, encontrándose en suspenso la acción ejecutiva.*

*"Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala concluye que la providencia judicial por medio de la cual se revocó la perención del proceso es irrazonable y, en consecuencia, tal decisión se constituye en una violación al derecho fundamental al debido proceso de la demandante al interpretar la normativa aplicable al caso en contravía de los derechos fundamentales y, por ende, en causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto sustantivo"<sup>5</sup>.*

*"Es importante poner de presente que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, como juez constitucional, tuvo la oportunidad de conocer de una acción de tutela, donde se negó la prescripción de obligaciones reconocidas en una sentencia ordenando seguir adelante con la ejecución, invocada con soporte en la anterior decisión de la Corte Constitucional y que el juez ordinario no aceptó, donde tuvo la oportunidad de expresar que si bien no advertía una irregularidad manifiesta en la decisión que se impugnó por vía de tutela; igualmente,*

---

<sup>5</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-581 del 27 de julio de 2011. M. P. Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB.

*indicó aunque la sala pudiera discrepar del criterio consignando por el juez ordinario; al efecto puntualizó: "3. En este orden de cosas, con independencia de que se comparta o no la interpretación del funcionario acusado, ello no descalifica su providencia ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la decisión judicial sea el resultado de una actuación arbitraria, contraria a la normatividad jurídica reguladora del asunto y violatoria de las garantías fundamentales, circunstancias que en el caso bajo análisis lejos están de darse, el proveído censurado consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y todas la pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente; aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por la juez de instancia accionada, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda el referido auto, sobre todo cuando esta determinación no hace tránsito a cosa juzgada"*<sup>6</sup> (Sentencia del 10 de abril de 2014; Sala segunda de decisión civil. Proceso ordinario promovido por Camilo Alfonso Medina Arango en contra de Finevesa S. A. en liquidación, Rdo. 05001-31'03-001-2011-00285-01).

Con el devenir, el legislador estableció mecanismos para sancionar la inactividad de las partes, aun en los procesos

---

<sup>6</sup> Sentencia del 25 de junio de 2012. M. P. Dra. Ruth Marina Díaz Rueda; Exp. 58001-22-13-000-2012-00205-01.

ejecutivos, es así como el art 317 del C. General del Proceso estableció que si luego de proferida la sentencia ordenando seguir la ejecución, el proceso permanece inactivo por dos años, se pueda dar por terminado por desistimiento tácito; en cuyo caso se puede iniciar luego de transcurrido seis meses, previendo el literal f) del numeral 2º del dispositivo, que serán ineficaces todos los efectos que se derivan de la presentación de la demanda, incluyendo el de la interrupción a la prescripción; así mismo, estableció que si se decreta por segunda vez el desistimiento tácito, el derecho pretendido se extinguirá.

Como en efecto, se consagró mecanismos para solicitar al interior del proceso ejecutivo, su terminación por inactividad, así se haya proferido auto o sentencia ordenando seguir la ejecución; incluso, con la posibilidad de decretar la extinción del derecho perseguido, como ocurre cuando se decreta por segunda vez la terminación del proceso por desistimiento tácito; incluso, como encuentro que es un mecanismo más expedito y menos traumático, con incidencia en la congestión de la rama judicial, que es de público conocimiento, pues no se requiere del engorroso trámite de un proceso ordinario, estoy de acuerdo con la decisión que ahora se revisa y, rectifico el criterio, en la forma que viene de exponerse.

Medellín, 10 de julio de 2023



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Gil Marin', with a long horizontal stroke extending to the right.

**LUIS ENRIQUE GIL MARIN**

Magistrado